ADMINISTRACION DEL ESTADO

**MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
DEMARCACION DE COSTAS DE ANDALUCIA-ATLANTICO
CADIZ
INFORMACION PÚBLICA**

Por la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico se instruyen los procedimientos abajo relacionados, incoados para la determinación de derechos concesionales de usos y aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre estatal (DPMT), en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, sobre fincas incluidas, respectivamente, en los deslindes de los bienes de DPMT con las referencias siguientes: DES01/12/11/0001, aprobado por O.M. de 15 de febrero de 2023, del tramo de costa de la Bahía de Cádiz que comprende las marismas y caños entre el Puente Zuazo, la Carraca y la Clica, T.M. de San Fernando (Cádiz); deslinde DES01/97/11/0038-DES10/01 (DL-67-CA), aprobado por O.M. de 21 de septiembre de 2022, en el tramo de costa de la Bahía de Cádiz que comprende las marismas y caños entre la margen izquierda del río Iro, el caño de Sancti-Petri y el caño de la Isleta, T.M. de Chiclana de la Frontera (Cádiz); y deslinde DL-31-CA, aprobado por O.M. de 28 de diciembre de 2001, en el tramo de costa de las marismas y caños comprendidos entre la CN-IV, el caño de Sancti-Petri y la Bahía de Cádiz, T.M. de Puerto Real (Cádiz).

Conforme al artículo 152.8.a) del Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, se someten los expedientes a información pública durante veinte días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio, pudiendo ser examinados en las oficinas de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, sita en C/Marianista Cubillo, nº 7, de Cádiz, previa cita a través de la dirección bzn-dccadiz@miteco.es, plazo durante el cual los comparecientes podrán realizar las alegaciones que estimen pertinentes.

(1)	(2)	PARCELA CATASTRAL	FINCA REGISTRAL
CNC12/23/11/0010	P.1 DES01 /12/11 /0001	11031A005000020000KQ 11031A005000030000KP	FINCA 1479 REGISTRO PROPIEDAD 2 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
CNC12/25/11/0001	P.29 DES01 /12/11 /0001	11031A005000010000KG	FINCA 1466 REGISTRO PROPIEDAD 2 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
CNC12/25/11/0002	P.27 DES01 /97/11 /0038- DES 10/01	11015A001000010000QQ	FINCA 3868 REGISTRO PROPIEDAD 2 CHICLANA FRA. (CÁDIZ)
CNC12/25/11/0003	P.40 DL-31-CA	11028A019000320000KP 11028A019000330000KL	FINCAS 203 Y 421 REGISTRO PROPIEDAD 2 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

(1) EXPEDIENTE (2) PARCELA DESLINDE
07/07/2025. EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN. Fdo.: Patricio Poulet
Brea.

Nº 112.480

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

**CONSORCIO INSTITUCION FERIAL DE CADIZ
C-IFECA
EDICTO**

Habiéndose aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio Institución Ferial de la Provincia de Cádiz C-IFECA, al punto 3 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2024, el Presupuesto General de este Consorcio para el ejercicio 2025, así como las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se contempla.

Habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 111, de 13 de junio de 2025 (edicto nº 88.474), sin que se hayan presentado reclamaciones, se consideran definitivamente aprobados ambos documentos (Presupuesto y Plantilla de Personal).

De conformidad con lo prescrito en los artículos 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20 y 21 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; y en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, procede la publicación del Presupuesto resumida por capítulos, así como de la Plantilla.

Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente tras la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.

"PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL CONSORCIO C-IFECA

GASTOS	
Cap. 1: Gastos de Personal	1.100.899,08 €
Cap. 2: Gastos en Bienes Corrientes y Serv.	1.070.282,67 €
Cap. 3: Gastos financieros	62.500,00 €
Cap. 4: Transferencias corrientes	2.800,00 €
Cap. 6: Inversiones reales	50.600,00 €
Cap. 8: Activos financieros	15.000,00 €
Cap. 9: Pasivo financiero	335.000,00 €
TOTAL GASTOS	2.637.081,75 €
INGRESOS	
Cap. 3: Tasas y otros ingresos	315.305,29 €
Cap. 4: Transferencias corrientes	1.942.299,26 €
Cap. 5: Ingresos patrimoniales	29.477,20 €
Cap. 7: Transferencias Capital	335.000,00 €
Cap. 8: Activos financieros	15.000,00 €
TOTAL INGRESOS	2.637.081,75 €

PLANTILLA DE PERSONAL

DENOMINACIÓN	(1)	(2)	(3)	ESCALA	SUBESCALA	CL
T.A.G.	3	A	A1	A.G.	Técnica	
T.A.E.	2	A	A1	A.E.	Técnica	Superior
T.G.M.	1	A	A2	A.E.	Técnica	Media
COORD. ADMINISTRATIVO	1	B		A.G.	Gestión	
COORD. TECNICO	1	C	C1	A.E.	Técnica	Auxiliar
ADMINISTRATIVO	2	C	C1	A.G.	Adva.	
COORD. ADMINISTRATIVO	1	C	C1	A.G.	Adva.	
COORD. SERVICIOS	1	C	C1	A.E.	Técnica	Auxiliar
ENCARGADO DE EVENTOS	1	C	C1	A.E.	Técnica	Auxiliar
OFICIAL SERVICIOS	5	C	C1	A.E.	SS.EE.	P.Of.
AUX. ADMINISTRATIVO	1	C	C2	A.G.	Aux.	
OFICIAL ELECTRICISTA	1	AP		A.E.	SS.EE.	P.Of.
PEON SERVICIOS VARIOS	5	AP		A.E.	SS.EE.	P.Of.

(1) Nº PLAZAS (2) GRUPO (3) SUBGRUPO

7 de julio de 2025. El Vicepresidente de C-IFECA, Fdo.: Francisco Javier Vidal Pérez.
Nº 112.470

**AREA DE DESARROLLO LOCAL, ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y
SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE RECAUDACION ZONA DE LA SIERRA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO**

Dª. María Remedios Márquez Vílchez, jefa de la Unidad de Recaudación de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.

HAGO SABER

En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios del Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, titular de los valores de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos

CONCEPTO

TASADERECOGIDADEBASURADELMUNICIPIODEALCALÁ DEL VALLE, 2º TRIMESTRE ejercicio 2025

TASADERECOGIDADEBASURADELMUNICIPIODEZAHARA DE LA SIERRA, 2º TRIMESTRE ejercicio 2025

PLAZOS DE INGRESO

Del 10 de Julio hasta el 23 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

MODALIDADES DE PAGO

El pago podrá realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en días laborables y en horario de caja.

Mediante bizum o tarjeta bancaria

- A través de la app "DipuPay" disponible en Google Play y App Store.

- A través de nuestra Sede Electrónica, en: <https://sprygt.dipucadiz.es/pago-de-deudas> (Accediendo con certificado/cl@ve o accediendo sin identificar).

Mediante pago aplazado

- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria.

- A través de un plan personalizado de pago.

Mediante pago en entidades de crédito previa obtención de dístico/carta de pago

Puede obtener el dístico/carta de pago a través de las siguientes vías:

- Nuestra Sede Electrónica, <https://sprygt.dipucadiz.es/pago-de-deudas> (Accediendo con certificado/cl@ve o accediendo sin identificar). Mediante esta opción puede también pagar mediante bizum o tarjeta bancaria.

- Presencialmente, en las oficinas del SPRyGT de la Diputación de Cádiz (https://www.dipucadiz.es/recaudacion_y_gestion_tributaria/red-de-oficinas/), solicitando cita previa en: <https://www.citapreviasprygt.es/> (o en el teléfono 856 940 262).

Una vez obtenida la carta de pago deberá acudir a las siguientes entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.

Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856 940 250 de la Unidad de Recaudación de Olvera o con carácter excepcional y con cita previa (solicitándola en: <https://www.citapreviasprygt.es/> o en el teléfono 856 940 262) de la unidad sita en c/ Bellavista 16, en horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que hago público para general conocimiento.

09/07/2025. La jefe de la Unidad de Recaudación, María Remedios Márquez Vilches. Firmado.

Nº 113.104

**AREA DE PLANIFICACION,
COORDINACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO (IEDT)
EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA DE SUBVENCIONES**

El Consejo Rector de este Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2025, acordó la aprobación inicial de modificación de la Ordenanza General de Subvenciones que regula el procedimiento de concesión de subvenciones (B.O.P. DE CÁDIZ NÚM. 2008 Nº 201 de 21 de octubre de 2008 N.º 11.586).

No habiéndose formulado alegaciones a dicho acuerdo en el plazo de exposición pública, tampoco se ha realizado objeción alguna a la modificación de la citada Ordenanza General de Subvenciones ni por la Subdelegación del Gobierno del Estado, ni por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el trámite previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. En consecuencia con ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a la publicación íntegra del texto de la modificación de dicha Ordenanza para general conocimiento, entrando en vigor al día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Por la Secretaría del IEDT, se procederá a publicar la Ordenanza General de Subvenciones para general conocimiento, en la siguiente dirección de la página web: <https://www.dipucadiz.es/iedt/subvenciones/ordenanza-general-de-subvenciones-del-iedt/>

Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1º.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente

**ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE CÁDIZ
ÍNDICE**

CAPÍTULO I: Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación Artículo 2. Régimen jurídico

Artículo 3. Principios generales

Artículo 4. Prohibiciones

Artículo 5. Objeto de las subvenciones Artículo 6. Afectación y aceptación

Artículo 7. Beneficiarios

Artículo 8. Entidades colaboradoras

Artículo 9. Órganos competentes

Artículo 10. Principios de la concesión de subvenciones Artículo 11. Carácter de las subvenciones

Artículo 12. Presentación de solicitudes

Artículo 13. Notificaciones

Artículo 14. Transparencia y publicidad

Artículo 15. Medios de difusión

CAPÍTULO II: Procedimientos de concesión de subvenciones

Artículo 16. Normas comunes a todos los procedimientos.

Artículo 17: Procedimientos de concesión de subvenciones

Artículo 18. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva.

Artículo 19. Especificidad subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.

Artículo 20. Procedimiento de concesión directa de subvenciones.

Artículo 21. Tramitación anticipada.

Artículo 22. Concesión de subvenciones con carácter plurianual.

Artículo 23. Ampliación del crédito.

CAPÍTULO III: Evaluación, selección y modificación de la resolución de concesión

Artículo 24: Evaluación y selección.

Artículo 25: Modificación de la resolución de concesión.

CAPÍTULO IV: Gestión y justificación

Artículo 26. Abono de las subvenciones.

Artículo 27. Subcontratación de las actividades subvencionadas.

Artículo 28. Justificación de las subvenciones.

Artículo 29. Comprobación.

Artículo 30. Control del gasto

CAPÍTULO V: Reintegro de subvenciones

Artículo 31. Supuestos de reintegro.

Artículo 32. Procedimiento de reintegro.

CAPÍTULO VI Régimen sancionador Artículo 33. Régimen sancionador.

Disposición Adicional Única. Compatibilidad normativa

Disposición Derogatoria Única

Disposición Final. Entrada en vigor

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la concesión de subvenciones por parte del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz (I.E.D.T.), asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en consonancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, así como del régimen de abono, justificación, control, reintegro y régimen sancionador de dichas subvenciones y ayudas públicas.

Esta ordenanza se aplicará a todas las subvenciones otorgadas por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz (I.E.D.T.), independientemente de su naturaleza y cuantía, adaptando sus procedimientos a lo dispuesto en la Ley 39/2015.

Las bases reguladoras de las subvenciones se completarán, en su caso, con los elementos establecidos en la resolución de convocatoria o de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No obstante, la referencia a que las bases generales se completan con la resolución de concesión debe entenderse dentro de los límites establecidos en los artículos 28.1 de la LGS y 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS). En particular, la resolución de concesión, y en su caso los convenios que canalicen las subvenciones, establecerán las condiciones y compromisos conforme a la normativa aplicable, sin innovar ni contradecir lo ya dispuesto en las bases reguladoras, sean estas generales, específicas o de convocatoria.

Asimismo, las bases reguladoras se aprobarán en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, sin que ello excluya la posibilidad de establecer bases específicas para determinados programas o líneas de subvenciones. Estas bases específicas podrán incluir condiciones adicionales como criterios de evaluación, plazos, requisitos de justificación o disposiciones necesarias para garantizar una correcta tramitación y ejecución de las ayudas. En todo caso, la resolución de concesión deberá motivarse conforme al artículo 25.2 de la Ley

General de Subvenciones, y no podrá incorporar innovaciones contrarias al marco regulador preexistente."

2. Quedan excluidas de esta Ordenanza:

a) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias realice el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.

3. Cuando las características de las subvenciones a conceder requieran la aprobación de una regulación específica, o las bases reguladoras de dichas ayudas vengan expresamente contempladas en las bases de ejecución del presupuesto, la presente norma, en su condición de Reglamento General en la materia, será también de aplicación supletoria en todo lo no regulado por aquéllas.

Artículo 2. Régimen Jurídico

1. Sin perjuicio de lo señalado en los apartados siguientes, las subvenciones que se otorguen se regirán, además de por las normas contenidas en esta Ordenanza, por las siguientes disposiciones:

* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

* Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. RD 887/2006 de 21 de julio.

* Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Cádiz.

* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.

3. Los procedimientos de concesión y control de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

4. La presente Ordenanza General de Subvenciones, como marco normativo general, regula las Bases Generales de las subvenciones otorgadas por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Cádiz. Aunque no se articulen necesariamente en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto, es importante subrayar que ambas normas tienen naturaleza reglamentaria y regulan ámbitos específicos sin prelación normativa entre ellas. Por tanto, la Ordenanza se ajustará a los elementos de regulación obligatoria señalados en el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, mientras que las Bases de Ejecución se limitarán a las materias relativas a la ejecución presupuestaria, conforme al artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990. Así, cada instrumento normativo operará en su ámbito material específico, debiendo garantizarse que ninguna norma invada el ámbito de la otra, asegurando así su correcta aplicación en el marco jurídico correspondiente.

Artículo 3. Principios generales.

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico otorgará las subvenciones con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y atendiendo a los criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados al establecerlas y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 4. Prohibiciones

1. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, siendo nulos los acuerdos que las otorguen.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras ayudas de otros entes públicos o instituciones privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

3. No podrán otorgarse subvenciones que carezcan de la correspondiente cobertura presupuestaria, siendo nulos los actos que contravengan esta disposición.

4. Las subvenciones reguladas por la presente ordenanza podrán concederse con carácter plurianual, siempre que así se contemple de manera expresa en la correspondiente convocatoria y se ajuste a lo dispuesto en la normativa presupuestaria aplicable.

5. La posibilidad de subvenciones plurianuales no podrá predicarse de las subvenciones nominativas, de conformidad con lo establecido en la Circular 1/2019 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

6. Los requisitos específicos para la concesión de subvenciones plurianuales se detallarán en la correspondiente convocatoria, asegurando el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

7. No podrán otorgarse subvenciones contrarias a la libre competencia empresarial de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea.

Artículo 5. Objeto de las subvenciones.

1. El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de proyectos, acciones, conductas o situaciones que tengan por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública, cuando el apoyo financiero se considere la forma de intervención idónea, dentro de las competencias propias de dicho Instituto.

2. Las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones u otorguen directamente éstas, deberán definir con claridad el objeto y finalidad de la subvención en los términos previstos en las presentes Bases.

Artículo 6. Afectación y aceptación

1. Las subvenciones estarán afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés público a que se condicione su otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio de su reintegro cuando se incumplan las condiciones a que estaba sujeta su concesión.

2. Las subvenciones deberán ser aceptadas por los beneficiarios, a los efectos del cumplimiento de las condiciones derivadas de su otorgamiento. Salvo que en el acuerdo de concesión se establezca otra cosa, las subvenciones concedidas se entenderán aceptadas si los beneficiarios no se oponen o las rechazan, expresamente, en el plazo de diez días contados desde la notificación de su concesión.

Artículo 7. Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. Salvo que la convocatoria de la subvención prevea expresamente lo contrario, o el objeto de la misma resulte incompatible, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios los miembros asociados de las personas a que se refiere el apartado anterior que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.

3. Asimismo, de no existir disposición en contra en la convocatoria o existir incompatibilidad con el objeto de la subvención convocada, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. En estos casos deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

4. Las convocatorias de subvenciones determinarán los requisitos específicos que deben reunir los beneficiarios para participar en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el objeto de la misma. Así mismo, y conforme a lo establecido en el art. 17.3.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las bases reguladoras de cada convocatoria, se publicarán en el B.O.P. de Cádiz y así como forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. En cualquier caso, no podrán obtener la condición de beneficiarios, las personas o entidades que no reúnan los requisitos exigidos por la referida Ley General de Subvenciones.

Artículo 8. Entidades colaboradoras

1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en la convocatoria, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

2. Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

3. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan en la convocatoria.

Artículo 9. Organos competentes.

1. La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones se efectuará por la Presidencia del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, o persona en quien esta delegue, conforme a lo establecido en sus Estatutos.

2. De acuerdo con el artículo 9.2 de los estatutos del IEDT, la aprobación de la Ordenanza requerirá la superior autorización y aprobación de la Diputación Provincial, que deberá ratificar la decisión del Consejo Rector antes de que se efectúe su publicación definitiva.

3. Corresponden al Consejo Rector y a la Presidencia del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, en el ámbito de sus atribuciones respectivas, la concesión de las subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que puedan realizarse así como lo previsto al respecto en las bases de ejecución del presupuesto.

4. Las convocatorias de subvenciones indicarán, en todo caso, los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

Artículo 10. Principios de la concesión de subvenciones

La concesión de subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza se realizará con sujeción a los siguientes principios:

1. Publicidad y Transparencia: Todas las subvenciones serán publicadas en el Portal de Transparencia, garantizando el acceso a la información sobre las bases reguladoras, convocatorias, beneficiarios y resultados de auditorías.

2. Concurrencia y Competencia: Las subvenciones podrán ser concedidas mediante procedimientos de concurrencia competitiva o no competitiva, conforme a las necesidades y características específicas de cada convocatoria.

3. Objetividad e Igualdad: La adjudicación de subvenciones se realizará basándose en criterios objetivos y públicos, asegurando la igualdad de oportunidades para todos los solicitantes.

4. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo

de concesión.

5. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 11. Carácter de las subvenciones

1. Las subvenciones tienen carácter voluntario y eventual, salvo que legal o reglamentariamente se disponga otra cosa.

2. Los beneficiarios de las subvenciones no podrán exigir el aumento ni invocarlas como precedente.

Artículo 12 . Presentación de Solicitudes

1. Plazo: - La presentación de solicitudes por parte de los interesados se llevará a cabo en el plazo señalado al efecto en las bases de la convocatoria.

2. Registro Electrónico: Las solicitudes de subvenciones deberán ser presentadas a través del registro electrónico de la Administración, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015.

Los solicitantes y beneficiarios de subvenciones tendrán la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta del Reglamento Electrónico de la Diputación de Cádiz, no siendo válida la presentación en papel.

3. Documentación Requerida: La documentación exigida se presentará en formato electrónico, utilizando declaraciones responsables cuando sea posible, para simplificar el proceso administrativo.

Artículo 13 - Notificaciones

1. Notificaciones Electrónicas: Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de concesión de subvenciones se realizarán de manera electrónica, mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz.

2. Carpeta Ciudadana: Los solicitantes podrán acceder a la Carpeta Ciudadana a través de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General Electrónico para el seguimiento de sus trámites administrativos, recibir comunicaciones y comparecer para acceder a las notificaciones electrónicas, de conformidad con el Reglamento de la Administración Electrónica de la Diputación de Cádiz.

Artículo 14 - Transparencia y Publicidad

1. Portal de Transparencia de la Diputación de Cádiz: Toda la información relevante sobre las subvenciones, incluyendo bases reguladoras, convocatorias, resoluciones y resultados de auditorías, será publicada en el Portal de Transparencia de la Administración.

2. Acceso a la Información: Se garantizará el acceso a la información pública relacionada con las subvenciones, respetando la normativa de protección de datos.

Artículo 15 – Medios de difusión

1. Deberán ser adecuados al objeto subvencionado pudiendo consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente, leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

2. El incumplimiento de la obligación de dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que sean objeto de subvención se establece como causa de reintegro en el artículo 37.1.d LGS. A este respecto dispone el Reglamento de desarrollo de la LGS que las bases reguladoras de las subvenciones deben establecer las medidas de difusión que tienen que adoptar el beneficiario de una subvención para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier tipo que sea objeto de subvención.

En caso de incumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en las reglas generales del artículo 18 de la presente Ordenanza en cuanto a la cuantía a reintegrar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del RGS, en los supuestos de incumplimiento se aplicarán las siguientes reglas: a) Si aún resulta posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a quince días hábiles, pero no podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que se haya dado cumplimiento a este trámite. b) Cuando, habiéndose llevado a cabo las actividades afectadas, no resulte posible el cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitan dar difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las acordadas inicialmente.

3. En el requerimiento que se dirija al beneficiario deberá fijarse un plazo no superior a quince días hábiles para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias de dicho incumplimiento: reintegro parcial por falta de justificación, ejecución subsidiaria por el órgano concedente con cargo al beneficiario y responsabilidad sancionadora en que pudiera incurrir.

CAPÍTULO II Procedimientos de concesión de subvenciones

Artículo 16. Normas comunes a todos los procedimientos.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá acreditarse la existencia de crédito suficiente mediante certificación expedida por la Intervención del Instituto. La convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto en la partida correspondiente, y la resolución de concesión el compromiso de dicho gasto.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y deberán contener una declaración relativa a otras subvenciones concedidas o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos e

informaciones que se determinen en la norma o convocatoria correspondiente. No obstante, si los documentos requeridos ya se encuentran en poder del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, será necesario indicar la fecha y el órgano o dependencia donde fueron presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no haya transcurrido un plazo superior a cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan."

4. En las bases de la convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante, en cuyo caso se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Este plazo sólo podrá ser ampliado en los procedimientos de concesión directa.

6. Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva, a los criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la actividad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo. En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención expresa a la desestimación del resto de las solicitudes.

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases reguladoras de la concesión y, en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios de acuerdo con lo que se establezca en las citadas bases.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la concesión.

7. Las resoluciones se notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

8. En los casos en que las bases reguladoras de la concesión requieran la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos tras la concesión o la aceptación expresa de la resolución de concesión, éstas deberán producirse en el plazo que fijen las bases reguladoras o, en su defecto, en el de quince días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la resolución. En el supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo con notificación al interesado. De la aceptación quedará constancia en el expediente.

Artículo 17. Procedimientos de concesión de subvenciones.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva de acuerdo al artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al art. 55.1 del Reglamento aprobado por el RD 887/2006 de 21 de julio, no obstante, podrán concederse en régimen de concurrencia no competitiva o de forma directa, estas últimas, en los supuestos contemplados en el art. 22.2 de la referida Ley.

2. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

3. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

4. Tendrá la consideración de concurrencia no competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el art. 55.1, párrafo segundo, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, sin atender al orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, concediéndose las subvenciones a todos aquellos solicitantes que cumplan los mismos hasta agotamiento del crédito consignado en la convocatoria, o hasta que finalice el plazo de presentación de las solicitudes.

5. Únicamente podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del I.E.D.T. de

la Diputación, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al I.E.D.T. por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Artículo 18. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva.

1. Los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva se iniciarán siempre de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras específicas y del Boletín Oficial en que se han publicado, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Aplicación presupuestaria a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. Tratándose de subvenciones para la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se fijará el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva o no competitiva.

f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

g) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

h) Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que se publicará con el anuncio de convocatoria.

i) Plazo de resolución y notificación. La Resolución se deberá emitir y notificar en el plazo máximo de seis meses, salvo que legalmente se estableciera otro. Dicho plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en ésta se establezca otra fecha posterior para iniciar el cómputo. El vencimiento de este plazo legitima a los interesados a entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión, quedando facultado para interponer el recurso correspondiente.

j) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden ser sustituidos por una declaración responsable para su presentación posterior con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza.

k) El régimen de garantías aplicable a las subvenciones otorgadas bajo la presente ordenanza se regirá por lo establecido en la correspondiente convocatoria, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de subvenciones.

l) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Subvenciones.

m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.

n) Criterios de valoración de las solicitudes, según se trate de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva o no.

o) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones las impuestas, que resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, se emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada por la Comisión de Valoración, cuya composición será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras de la convocatoria.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

6. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

7. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

8. La propuesta de resolución definitiva, cuando difiera de la cantidad solicitada, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación, en caso de no hacerlo transcurrido el plazo indicado se considerará aceptada.

9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

10. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

11. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

12. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

13. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 19. Especificidad Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva

1. Ámbito de aplicación. Este régimen excepcional será aplicable a subvenciones cuya naturaleza y finalidad no requieran establecer una comparación entre solicitudes ni criterios de prelación, siendo suficiente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria. Se regirá por los principios de Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, conforme al artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, en virtud del artículo 55.1 del Reglamento General de Subvenciones, se establece que este procedimiento será aplicable siempre que las bases reguladoras justifiquen adecuadamente su idoneidad en relación con la naturaleza y los objetivos de las subvenciones.

2. Motivación de la convocatoria. La utilización del régimen de concurrencia no competitiva estará justificada por la urgencia, prioridad o especificidad del objetivo a alcanzar, como la promoción de actividades estratégicas, la cobertura de necesidades sociales esenciales o el fomento de sectores específicos cuya sostenibilidad dependa de una intervención inmediata. La motivación será expresada en la convocatoria y en sus bases reguladoras, fundamentando la elección de este procedimiento.

Podrán convocarse y concederse motivadamente en régimen de concurrencia no competitiva cuando la naturaleza de la subvención lo aconseje en atención a los criterios objetivos que se establezcan en las bases específicas sin necesidad de que los criterios objetivos de valoración estén sujetos a puntuación.

3. Criterios para la concesión:

a. Las subvenciones se otorgarán en función del orden de entrada de las solicitudes completas en el registro correspondiente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y exista crédito presupuestario suficiente.

b. Se garantizará que las solicitudes sean evaluadas de forma objetiva y conforme a los criterios previamente establecidos en la convocatoria.

4. Tramitación y resolución

a. El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública, donde se especificarán los objetivos, requisitos, documentación requerida, cuantías, orden de prelación por registro y demás condiciones aplicables.

b) Una vez agotado el crédito presupuestario, se dictará resolución motivada desestimando las solicitudes pendientes, informando a los interesados de esta circunstancia.

5. Transparencia y control

La convocatoria, que será motivada, garantizará la publicidad de los criterios de asignación y el seguimiento del cumplimiento de los fines subvencionados. Además, se asegurará la aplicación de controles adecuados para verificar el correcto uso de los fondos públicos.

6. Compatibilidad y justificación

Los beneficiarios estarán sujetos a las mismas obligaciones de justificación, control y reintegro que las establecidas en esta ordenanza para otros regímenes de concesión.

Artículo 20. Procedimiento de concesión directa de subvenciones.

1. El procedimiento de concesión directa de subvenciones se sustanciará de acuerdo con las normas generales de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado o de oficio. A tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro Electrónico del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, de conformidad con el artículo 14.3 de Ley 39/2015 de 1 de octubre, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.

2. La subvención o ayuda pública solicitada se concederá sin comparación con otras solicitudes y siempre que exista consignación presupuestaria para ello, y que se cumplan los requisitos establecidos en la resolución de concesión y en su caso, los convenios que canalicen las subvenciones.

3. Cuando se trate de subvenciones a conceder directamente por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, la solicitud deberá cumplir los requisitos exigidos con carácter general en esta ordenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que se solicita y la actividad a subvencionar, acompañando, cuando sea susceptible de ello, memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y gastos y desglose de partidas o conceptos. En el expediente se acreditarán las razones que dificulten la convocatoria pública y motivan la concesión directa.

4. Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz se harán efectivas en sus propios términos por los órganos a los que corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que se hallaren consignadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las bases de ejecución. A tales efectos, tras el acuerdo de iniciación, el órgano instructor del procedimiento deberá requerir al beneficiario para que aporte, en su caso, la misma documentación que se especifica en el apartado anterior.

Artículo 21. Tramitación anticipada

1. La convocatoria podrá aprobarse con anterioridad al ejercicio en el que tenga lugar la resolución de la misma y siempre que se ejecute el gasto en la misma anualidad en la que se produce la concesión.

2. La cuantía total máxima de la convocatoria tendrá carácter estimativo por lo que deberá recogerse expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución.

3. En el expediente de gasto deberá figurar el correspondiente certificado o documento de existencia de crédito.

4. Los efectos de los actos de trámite dictados en el expediente de gasto estarán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y derecho en que fueron producidos dichos actos.

Artículo 22. Concesión de subvenciones con carácter plurianual

1. Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga la resolución de la concesión. Debiéndose indicar la cuantía total máxima a conceder así como su distribución por anualidades, la cual tendrá carácter estimativo cuanto se contemple la posibilidad de los solicitantes de optar por el pago anticipado, debiéndose, en este caso, señalar la distribución por anualidades de la cuantía atendiendo al ritmo de ejecución de la acción subvencionada. La imputación a cada ejercicio se realizará previa aportación justificativa equivalente a la cuantía que corresponda.

2. La alteración del calendario de ejecución acordado en la resolución se registrará por lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 23. Ampliación del crédito

1. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de la subvención no requerirá de una nueva convocatoria.

2. La fijación y utilización de esta cuantía adicional dependerá de que puedan obtenerse del aumento de los créditos derivados de:

- Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas por importe inferior al gasto inicialmente previsto y con cargo a los mismos créditos presupuestarios.
- Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios.
- Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por importe inferior a la subvención concedida.
- Haberse incrementado el importe como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de créditos.

4. La convocatoria deberá recoger expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de créditos como consecuencia de las circunstancias anteriores, y en su caso previa aprobación de la modificación presupuestaria, en el momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

CAPÍTULO III Evaluación, Selección y Modificación de la resolución de concesión

Artículo 24 - Evaluación y Selección

1. Criterios de Evaluación: La evaluación de las solicitudes, en los procedimientos de concurrencias, se basará en criterios objetivos previamente establecidos en cada convocatoria, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades.

2. Procedimientos Simplificados: Se podrán establecer procedimientos simplificados de evaluación y selección para ciertos tipos de subvenciones, especialmente aquellas otorgadas por concurrencia no competitiva. Dichos procedimientos se especificarán en la correspondiente convocatoria, indicando en qué consistirá la simplificación, los criterios aplicables y los plazos de resolución adaptados a la naturaleza de la subvención. En cualquier caso, estos procedimientos se adecuarán a lo recogido en la Ley General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Artículo 25. Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda pública, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Salvo que en la resolución de convocatoria o concesión se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

CAPÍTULO IV. Gestión y justificación

Artículo 26. Abono de las subvenciones.

1. Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación de haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó su concesión.

2. Podrán establecerse pagos anticipados en la resolución de convocatoria o de concesión directa, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los artículos 17.3.k y 34.4 de la Ley General de Subvenciones. Dichos pagos, que podrán alcanzar hasta el 100 % de la subvención concedida, estarán sujetos a las garantías que se determinen en las bases reguladoras o en la normativa aplicable, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines para los que se otorga la ayuda.

3. Asimismo, podrán realizarse abonos a cuenta en función de los gastos efectivamente realizados por el beneficiario y debidamente justificados. Estos abonos se efectuarán conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras, los cuales deberán respetar lo dispuesto en los artículos 17.3.k y 34.3 de la Ley General de Subvenciones, asegurando el principio de proporcionalidad y vinculando los pagos a los resultados obtenidos en la ejecución de la actividad subvencionada.

4. Tanto los pagos anticipados como los abonos a cuenta estarán sujetos a los requisitos y limitaciones que establezcan las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio económico y demás normativa aplicable.

Artículo 27. Subcontratación de las actividades subvencionadas.

Los beneficiarios podrán subcontratar la actividad subvencionada cumpliendo los requisitos que establece el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones. Salvo que las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones o se otorguen directamente éstas prevean expresamente un porcentaje superior, la subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada.

Artículo 28. Justificación de las subvenciones.

1. Los beneficiarios de subvenciones deberán presentar informes detallados y documentación justificativa del gasto realizado, conforme a lo establecido en las bases reguladoras de cada convocatoria.

2. Dentro del plazo que establezca la resolución de concesión, el beneficiario deberá justificar la misma en la forma que determine la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, al artículo 69 del Reglamento de dicha Ley aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de lo previsto en esta Ordenanza.

3. El importe definitivo de la subvención o ayuda se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.

4. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

5. El beneficiario de la subvención, deberá presentar la documentación que sea requerida conforma a las Bases Reguladoras de cada convocatoria.

Artículo 29. Comprobación.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención, mediante el servicio correspondiente, el auditor externo del artículo 74.a) del Reglamento de la LGS o a través del Departamento de Verificación y Control.

2. El I.E.D.T. podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 30 - Control del Gasto

1. Auditorías y Control: El IEDT realizará auditorías periódicas y controles financieros sobre la gestión de las subvenciones, ya sea mediante el servicio correspondiente o a través del departamento de verificación. Dichas actuaciones, que son distintas del control financiero ejercido por la intervención, tendrán como objetivo garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y detectar posibles irregularidades, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

2. Transparencia: Los resultados de las auditorías y controles serán publicados en el Portal de Transparencia, asegurando la rendición de cuentas.

CAPÍTULO V Reintegro de subvenciones**Artículo 31. Supuestos de reintegro.**

Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la resolución de concesión, así como cuando medie cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 32. Procedimiento de reintegro.

1. El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Este plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015. Si transcurre el plazo máximo sin que se haya notificado una resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de que puedan continuarse las actuaciones hasta su terminación. En tal caso, no se considerará interrumpida la prescripción de las acciones llevadas a cabo hasta la finalización del mencionado plazo.

c) En caso de incumplimiento parcial de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, procederá el reintegro parcial de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n de la Ley General de Subvenciones. El importe a reintegrar será proporcional al grado de incumplimiento y se determinará atendiendo a los criterios de graduación establecidos en las bases reguladoras, en las que se garantizará el respeto al principio de proporcionalidad.

d) Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la denominación del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones de la línea o programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la resolución y el reintegro corresponderá al órgano que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.

e) La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de los recursos que procedan contra la misma e indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.

f) Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente a la Tesorería del I.E.D.T. para que inicie el procedimiento de apremio. Cuando la obligada a reintegrar sea una Entidad pública no apremiable, se iniciará el expediente para la compensación de deudas.

CAPÍTULO VI Régimen sancionador**Artículo 33. Régimen sancionador.**

1. El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Instituto será el previsto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.

2. Corresponde a la Presidencia la competencia para imponer las sanciones previstas en dicho Título, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar conforme a los Estatutos de este Instituto. Al notificarse la resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el órgano competente para la resolución del mismo y la norma que le atribuya tal competencia.

Disposición Adicional Única. Compatibilidad Normativa

Todas las disposiciones de esta ordenanza deberán interpretarse y aplicarse de conformidad con la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable. En caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones de la Ley 39/2015.

Disposición derogatoria Única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza, quedando especialmente derogada la Ordenanza de 21 de octubre de 2008, publicada en el Bop de Cádiz nº 201.

Disposición Final. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresas.

Nº 117.618

AREA DE PRESIDENCIA**SECRETARIA GENERAL****EDICTO**

El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2025, acordó aprobar inicialmente el expediente de Modificación Presupuestaria nº 8/2025 del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, de crédito extraordinario del Presupuesto en vigor de esta Corporación.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 169.1 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 20.1 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a exposición pública durante el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de esta Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en la siguiente dirección de la página web: <https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica?entidadId=1&seccionId=6>, quedando a disposición de los interesados para su examen en cumplimiento del trámite a que hace referencia el número 1 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y siendo susceptible de reclamación en los términos previstos en el artículo 170 del mismo.

18/7/25. La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. Firmado. La Presidenta. Almudena Martínez del Junco. Firmado.

Nº 118.310

AREA DE PRESIDENCIA**SECRETARIA GENERAL****EDICTO**

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2025, acordó lo siguiente:

“PRIMERO. Aprobar inicialmente la nueva redacción de la Base 12 del PPCOS 24-25 de las reguladoras del Plan relativa a la “Libramiento de la Subvención. Documentación necesaria” en su apartado 2. “En el ejercicio presupuestario 2025 (30%)” quedando su redacción como sigue:

“2. En el ejercicio presupuestario 2025 (30%)
Una vez presentada en Diputación la siguiente documentación justificativa, se resolverá sobre el reconocimiento y liquidación de las obligaciones existentes frente a la Entidad Local beneficiaria en el importe correspondiente al 30% máximo restante del importe subvencionado previamente autorizado y dispuesto:

En caso de obras:

a.1.) Obras por contrata:

Modelo Anexo IX (Certificado de la Resolución o Acuerdo de la adjudicación)

a.2.) Obras ejecutadas directamente por la propia Administración:

Modelo Anexo IX.1 (Certificado de la Resolución o Acuerdo de ejecución directa de las obras por propia Administración)

En caso de obras ejecutadas por encargo a medios propios personificados:

Modelo Anexo IX.2 (Certificado de la Resolución o Acuerdo o de la formalización del encargo a medio propio personificado)

b) En caso de suministros:

Modelo Anexo IX (Certificado de la Resolución o Acuerdo de la adjudicación)

El importe a subvencionar será minorado proporcionalmente en el caso de producirse bajas de adjudicación.

En el caso que la cantidad anticipada (70%) sea superior al importe de adjudicación de la actuación financiada, deberán ser objeto de devolución voluntaria a Diputación en un plazo de 8 meses desde la formalización del contrato. Este importe, que será objeto de devolución voluntaria, no devengará intereses de demora si la devolución se efectúa dentro del plazo mencionado.

De no realizarse la devolución voluntaria de dicho importe, procederá el inicio de procedimiento de reintegro, exigiéndose el importe debido más los intereses de demora generados.

Una vez finalizadas las actuaciones y presentadas por parte de las EELL beneficiarias la documentación justificativa dentro de los plazos de ejecución y justificación del Plan, se procederá a comprobar la adecuada justificación de las subvenciones concedidas conforme al art 32 de la LGS.”

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la ampliación de los plazos de ejecución y justificación contenidos en las Bases Reguladoras del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2024-2025

(PPCOS 2024 – 2025), en la mitad de los plazos inicialmente establecidos, quedando como resultado lo siguiente:

1. Ejecución: 10 meses y 18 días, fijándose el fin del plazo en el 15 de septiembre de 2026.

2. Justificación: 10 meses y 21 días, fijándose el fin del plazo en el 28 de septiembre de 2026.

3. El cómputo de los plazos ampliados se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que finalicen los plazos inicialmente establecidos

TERCERO.- En casos excepcionales en los que fuera inevitable para alguna actuación de una EELL la redistribución del crédito necesaria, consecuente con esta ampliación de plazos, se tramitará, una vez se conozca en esta anualidad esos casos excepcionales derivados de la documentación de justificación que presenten los Ayuntamientos beneficiarios, el importe pendiente de reconocer para el ejercicio presupuestario 2026, cuyo crédito deberá incluirse en el presupuesto de la citada anualidad.

CUARTO.- Se delega en la Presidencia la autorización y disposición del gasto plurianual y la aprobación de la redistribución de las anualidades del gasto autorizado y comprometido en anualidades anteriores por ampliación del plazo del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPCOS 2024-2025) al ejercicio 2026.

QUINTO.- Mediante la aprobación del presente acuerdo, se resuelven las solicitudes de ampliación de plazo que se han solicitado por los Ayuntamientos beneficiarios.

SEXTO.- Someter dicha modificación al cumplimiento del trámite de publicidad previsto en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre la misma durante el plazo de diez días, quedando aprobada definitivamente una vez transcurra dicho plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones.”

El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica.

18/7/25. La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. Firmado. La Presidenta. Almudena Martínez del Junco. Firmado.

Nº 118.327

AREA DE PRESIDENCIA SECRETARIA GENERAL

EDICTO

El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2025, acordó aprobar inicialmente el expediente de Modificación Presupuestaria nº 65/2025, de crédito extraordinario.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 169.1 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 20.1 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a exposición pública durante el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de esta Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en la siguiente dirección de la página web: <https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica?entidadId=1&seccionId=6>, quedando a disposición de los interesados para su examen en cumplimiento del trámite a que hace referencia el número 1 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y siendo susceptible de reclamación en los términos previstos en el artículo 170 del mismo.

18/7/25. La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. Firmado. La Presidenta. Almudena Martínez del Junco. Firmado.

Nº 118.330

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Para general conocimiento, se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de El Puerto de Santa María, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2025, en el Punto Segundo de su Orden del Día, adoptó el acuerdo de aprobar la instrucción aclaratoria relativa a la aplicación de lo determinado en el punto 8 del art. 4.2.6 y artículos concordantes, 4.3.4, apartado 6 y 4.5.4, apartado 8, de las Normativas y Ordenanzas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno (PEPRICHyE), que regula los patios en las edificaciones tradicionales que se conserven y rehabiliten, que a continuación se expresa:

“A los efectos del cumplimiento de las condiciones de higiene y habitabilidad de la edificación tradicional que se conserve y rehabilite de acuerdo con las disposiciones del Plan Especial, se atenderá a lo determinado por la Normativa Técnica de Viviendas de Protección Oficial en lo que respecta a las dimensiones mínimas de patios establecidas en su art. 6 (en viviendas plurifamiliares, se fija una dimensión mínima para luces rectas y diámetro de 3 metros y de 12 m² para la superficie) y las determinaciones de su Ordenanza 13ª:

- En los patios interiores, la distancia entre paramentos enfrentados estará condicionada por su altura H y el uso de las habitaciones que iluminan los huecos, de forma que:

· En patios interiores a los que den dormitorios se debe poder inscribir un círculo de diámetro 0,30 H y la superficie del patio habrá de ser igual o mayor a H²/8.

Se fija un mínimo para luces rectas y diámetro de 3 metros y de 12 m² para la superficie, salvo en el caso de viviendas unifamiliares de una planta, en que los mínimos se reducen a 2 metros para las luces rectas y diámetro y 8 m² para la superficie.

· En patios interiores a los que den cocinas y no abran dormitorios se debe poder inscribir un círculo de diámetro 0,20 H y la superficie del patio habrá de ser igual o mayor a H²/10. Se mantienen los mínimos para luces rectas, diámetro y superficie de los patios a los que abran dormitorios.

· En patios interiores a los que no abran dormitorios ni cocinas se podrá inscribir un círculo de diámetro 0,15 H, y la superficie del patio habrá de ser igual o mayor a H²/20. Se fija un mínimo de 3 metros para luces rectas y diámetro y de 9 m² para la superficie.

- A efectos de determinar la dimensión de los patios interiores no se computarán como plantas los remates de la caja de escalera, ascensor y depósitos de agua, únicas edificaciones autorizadas a estos efectos y situadas por encima de la última planta de viviendas.

Se tendrán igualmente en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las dimensiones métricas de los patios se establecerán conforme a lo determinado en el art. 5.6.24 de la Normativa-Ordenanza del PGMO 92 en lo que se refiere al cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada por la longitud de cada uno dividido por la longitud total del perímetro que cierra el patio, teniendo en cuenta las excepciones anteriormente reseñadas.

2. Las piezas de estancia cumplirán los mínimos establecidos para los dormitorios.

3. La consideración de “edificación tradicional” englobaría aquella que presenta los invariantes tipo morfológicos y arquitectónicos característicos del casco histórico portuense, no incluyéndose aquellas edificaciones que se encuadren en los supuestos contemplados en los apartados 1c y 1d del art. 2.1.4 de las NNyOO.”

Contra el citado acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:

1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurra un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).

2.- Contencioso-administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 7 de julio de 2025.

EL ALCALDE. Firmado: Germán Beardo Caro.

Nº 111.779

AYUNTAMIENTO DE ALGAR

ANUNCIO

Expediente n.º: 151/2025. Mediante acuerdo de pleno de fecha 27/06/2025 se acordó la modificación de los puestos de operario/a limpiador/a, tras la negociación colectiva y los informes necesarios para ello, quedando de la siguiente forma:

PUESTO	NIVEL CD.
OPERARIO LIMPIADOR/A	14

PUESTO	OPERARIO LIMPIADOR/A (2)
FORMACIÓN	100
ESPECIALIZACIÓN	25
EXPERIENCIA	25
MANDO	0
REPERCUSIÓN	25
E. INTELECTUAL	0
E. FÍSICO	100
PENOSIDAD	125
PELIGROSIDAD	25

PUESTO	OPERARIO LIMPIADOR/A (2)
JORNADA	75
DED/ INC	50

7 de julio de 2025. Fdo.: José Carlos Sánchez Barea. Alcalde.
Nº 112.057

AYUNTAMIENTO DE CADIZ ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2025, al punto 4º, adoptó el siguiente acuerdo:

“Se da cuenta de propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de junio de 2025, al punto 2º del orden del día, que a continuación se transcribe:

“Emitido informe jurídico por el Jefe de Servicio de Urbanismo en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

Se ha venido evidenciando en los últimos años en nuestra ciudad una subida en los precios, tanto para el alquiler como para la adquisición de viviendas, destacando por ser uno de los municipios de Andalucía de más de 100.000 habitantes con mayor renta de alquiler, superando los 7,20€ el metro cuadrado, y teniendo que pagar una media de 3.199 euros el metro cuadrado para la adquisición, lo que supone un esfuerzo de compra del 75% de una renta media.

Una de las causas más importantes, y que más ha influido en el aumento del precio de la vivienda es la escasez de la oferta inmobiliaria para la demanda existente, calculándose en algunos estudios que actualmente hay una demanda de 4.000 viviendas de renta libre, existiendo además un total de 5.400 solicitudes en el Registro de Demandantes para la vivienda protegida.

Se calcula que la ciudad hoy sólo puede ofrecer suelo, o rehabilitación de edificios ya existentes, para algo menos de un millar de pisos, muy lejos de las necesidades que tiene nuestro municipio.

En base a todo lo anterior, se hace necesario que se tomen medidas para favorecer la posibilidad de implantar el uso residencial en aquellos inmuebles que al día de la fecha no pueden ser utilizados para ello, al no permitirlo las normas urbanísticas actuales, debiéndose realizar una adecuación puntual de las Normas Urbanísticas a las nuevas necesidades de ordenación, al objeto de favorecer la implantación del uso residencial frente otros usos, siendo el objeto del presente documento dar respuesta a las mismas, y así facilitar, por un lado el acceso a la vivienda a todos los colectivos y por otro la recuperación de los barrios, entendidos éstos como los espacios urbanos habitables con identidad propia

RESUMEN MEDIDAS PROPUESTAS.

A) REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE EJES COMERCIALES.

Actualmente la Ordenanza de Ejes Comerciales, que afecta exclusivamente a suelos residenciales, se aplica en gran parte de las calles del Casco Histórico de la ciudad.

Dicho tramado proviene del PGOU aprobado en el año 1995, dónde se establecía un listado de calles en las que se prohibía la implantación de usos residenciales en planta baja. El PGOU actual retomó en esencia dicha Ordenanza, limitándose a terminar de mallar dicho trazado, suavizando, además, las condiciones de implantación del uso residencial, permitiéndolo siempre que fuera en crujías interiores (locales que no daban a crujía de fachada).

El objetivo de dicha Ordenanza no era otro que consolidar en un caso, y potenciar en otro, la implantación de actividad económica en los locales situados en la planta baja de dichas calles.

Por ello, la ordenanza actual limita la implantación de los usos residenciales en las crujías de fachada de los locales de planta baja, en favor de usos que generan actividad económica (comerciales y terciarios).

Así, con la normativa vigente en el PGOU nos encontramos, por un lado, calles o tramos de calles con una actividad económica arraigada, y por otro calles que no han conseguido potenciar la actividad económica pretendida.

El resultado de la aplicación de dicha ordenanza en el devenir de los años está dando un resultado contrario al pretendido. Si bien en aquellas calles con una clara vocación económica se ha mantenido la actividad económica, en otras (su mayoría) está dando lugar a locales de reducidas dimensiones que ocupan la primera crujía de fachada, y que en muchos casos, permanecen cerrados o en su defecto utilizados como trasteros.

Ello repercute negativamente no sólo en la imagen urbana, sino en el tamaño y en la propia configuración de las viviendas que pueden construirse en dichos bajos, que necesariamente han de ventilar y tomar luces de patios principales ante la imposibilidad de hacerlo a fachada.

Por lo tanto, se pretende, reducir el ámbito de aplicación de dicha ordenanza (que actualmente afecta a 50 calles o tramos de calles), limitando los ejes comerciales exclusivamente a aquellas calles con una vocación histórica clara de actividad económica.

De este modo se conseguiría destinar a uso residencial las crujías de fachada de planta baja, lo que redundaría en aumentar las posibilidades de ampliar la oferta inmobiliaria para el uso residencial, cumpliendo en todo caso las condiciones particulares del uso residencial (acceso, habitabilidad, distribución, superficie, altura, etc..),

Todo ello sin perjuicio de seguir manteniendo la posibilidad de uso comercial y terciario como compatible en planta baja.

B) PERMITIR LA COMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL EN PARCELAS CALIFICADAS CON USO DE SERVICIOS TERCARIOS.

En el PGOU vigente, no se permite intercalar usos residenciales destinados a vivienda en fincas calificadas con uso terciario (oficinas y servicios de comercialización).

Con la regulación del PGOU actual, en suelos terciarios, son admisibles usos industriales y comerciales en convivencia con el uso terciario principal del edificio. Sin embargo, no es posible la implantación de usos residenciales destinados a vivienda en actuaciones parciales (que ocupen una planta o parte de una planta) de fincas calificadas con este uso terciario.

Se calcula que en la actualidad existen aproximadamente 30 fincas calificadas con uso terciario en el casco histórico y 12 fincas destinadas a este uso en la zona de extramuros.

Con la modificación prevista, se pretende permitir el uso residencial como uso compatible del uso terciario, de modo que un edificio destinado por ejemplo a oficinas, pueda albergar también, cumpliéndose tanto la normativa de este uso como el de aquel, viviendas en alguna de sus plantas.

CONSULTA PÚBLICA.

Por la Alcaldía-Presidencia se emitió, con fecha 30 de abril de 2025, Decreto por el que, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se sometía a consulta pública previa la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz para favorecer la implantación del uso residencial en la ciudad, al objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas, potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dicha consulta fue publicada en el portal web de este Ayuntamiento, con el objeto de recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, además de poder también recabar directamente la opinión de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o represente a las personas cuyos derechos e intereses legítimos se vieran afectados por la norma, y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, con un plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.

Finalizado el plazo para la presentación de sugerencias, han tenido entrada en el Registro Municipal las siguientes:

a) ACTION AND PROJECT BUSINESS, SL.

Solicita aclaración respecto al porcentaje previsto para implantar el uso residencial en edificios terciarios. De la lectura del resto del articulado, el alegante considera que sería admisible la implantación completa.

En relación a dicha sugerencia conviene aclarar que el artículo objeto de modificación, se corresponde con el art. 3.4.18.2. que hace referencia a la compatibilidad del uso residencial en suelo terciario. El art. 3.1.10.4. define el uso compatible como aquel que bajo determinadas condiciones puede coexistir con el uso cualificado del ámbito o el dominante en una parcela. Finalmente, el art. 3.1.15. Regulación de la Compatibilidad de Usos, en su apartado 3 define los porcentajes de compatibilidad de dichos usos: La superficie edificada total de los usos compatibles en un edificio o parcela no podrá rebasar el 49% de la superficie edificable adscrita a la misma.

Por lo tanto, solo podrán implantarse usos residenciales en edificios terciarios siempre que no superen el 49% de la superficie edificada de dicho edificio. Superar este porcentaje, implicaría no una compatibilidad, sino una transformación del uso terciario a favor del residencial no admisible en el art. 3.4.17.

b) Sr. Rovira.

Solicita eliminar el eje comercial de la calle San José (al menos el tramo entre Cervantes y Benjumeda). Se informa a los efectos oportunos que la modificación propuesta elimina el eje comercial de la calle San José en ese tramo.

c) Sra. Ordoñez

Solicita eliminar el eje comercial de la calle Teniente Andújar, y de la Plaza de la Merced. Por otro lado, solicita ampliación en altura de la finca nº10 de la calle Teniente Andújar, al considerar que la altura establecida en el PGOU es inferior a las colindantes.

Se informa que la modificación propuesta elimina el eje comercial de la calle Teniente Andújar. La ampliación en altura propuesta PARA LA FINCA Teniente Andújar, 10, no es objeto de la presente modificación.

d) Sr. Gumersindo Fernández.

Propone tres sugerencias:

SUGERENCIA I: Se propone incorporar la condición de uso secundario a fin de determinar el porcentaje máximo para la implantación del uso residencial en el uso terciario.

Se informa que el uso secundario se relaciona en proporción al uso principal, en función de la superficie útil. (art. 3.1.11.b)- El uso compatible se

relaciona en proporción al uso pormenorizado, en función de la superficie edificada. (art. 3.1.15.3). Por ello, se considera más adecuado tomar como referencia el criterio del uso compatible.

SUGERENCIA 2: En parcelas calificadas como Actividad Económica-Servicios Terciarios, se podría proyectar un edificio en el que coexistan oficinas-servicios de comercialización con el uso residencial.

Dicha interpretación se considera correcta, siempre que la superficie máxima edificable destinada a uso terciario sea al menos el 51% de la superficie edificable total del edificio.

SUGERENCIA 3: Se propone que, en edificios residenciales propuestos en ámbitos de planeamiento cuyas fichas de planeamiento incluyan como determinación que el uso comercial en planta baja, este se pueda transformar a residencial.

La sugerencia propuesta no es objeto de la presente modificación.

e) Sr. FERNANDO ORTÍZ

En relación a la implantación del uso residencial en el uso terciario, se proponen 2 sugerencias, y en cuanto a la reducción de los ejes comerciales 1:

SUGERENCIA 1: Propone la posibilidad implantar el uso residencial ocupando las crujías de fachada, y permitiendo el acceso desde el exterior mediante vestíbulo previo (existente o no), o desde zonas comunes.

Dicha propuesta ya se recoge en la modificación nº9. Se ha modificado el art. 3.3.8.1. Accesos en Edificios de Vivienda Colectiva, en el ámbito de la ordenanza de Ensanche moderno, permitiendo el acceso desde vía pública a viviendas siempre que se cumplan una serie de condiciones.

SUGERENCIA 2: Propone permitir la implantación del uso residencial en las plantas bajas de los edificios terciarios.

No se considera dicha sugerencia. Dicha modificación supondría desvirtuar el objetivo pretendido por el PGOU.

SUGERENCIA 3: Propone permitir la implantación de garajes familiares en ejes comerciales

No se considera dicha sugerencia. Dicha modificación supondría desvirtuar el carácter de eje comercial pretendido. No obstante, los ejes comerciales se reducen considerablemente, con lo cual sería admisible la implantación de dichos garajes familiares en más zonas del casco histórico.

f) MY FIRST HOME, SLU

Se propone flexibilizar las condiciones de implantación (superficies, alturas, ventilación... etc.) del uso residencial en la ordenanza del casco histórico habida cuenta del carácter particular del caserío gaditano. Propone también que se suavicen dichas medidas en las nuevas viviendas que se admitan como compatibles del uso terciario.

No se considera dicha sugerencia.

g) Sr. Nuñez de Herrera y Jesús Miguel Lara.

Se propone flexibilizar las condiciones de implantación (superficies, alturas, ventilación... etc.) del uso residencial en la ordenanza del casco histórico habida cuenta del carácter particular del caserío gaditano.

Propone suavizar dichas medidas en las nuevas viviendas que se admitan como compatibles del uso terciario.

No se considera dicha sugerencia.

h) Sra. Ana María Varón

Se propone flexibilizar las condiciones de implantación (superficies, alturas, ventilación... etc.) del uso residencial en la ordenanza del casco histórico habida cuenta del carácter particular del caserío gaditano y propone suavizar dichas medidas en las nuevas viviendas que se admitan como compatibles del uso terciario.

No se considera dicha sugerencia.

OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN.

Habida cuenta de que la Adaptación-Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz, que fue aprobada definitivamente de forma parcial por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por Orden de 24 de noviembre de 2011 y publicadas sus Normas urbanísticas en el BOJA de 16 de abril de 2012, incorpora determinadas condiciones de compatibilidad y transformación del uso residencial, y que la misma fue modificada por acuerdo del Excmo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2022, es objeto del presente documento el dar respuesta a las nuevas necesidades, mediante una nueva adecuación puntual de las Normas Urbanísticas para favorecer el uso residencial.

El ámbito de la Innovación se fija desde una concepción global y unitaria del conjunto de la ciudad y se hace extensiva a todo el término municipal.

La vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), así como el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley LISTA (RGLISTA) establecen que “La innovación de los instrumentos de ordenación urbanística se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación, entendiéndose por revisión la adopción de un nuevo modelo de ordenación establecido por el instrumento de ordenación urbanística, y que toda innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de ordenación urbanística no contemplada en ese apartado se entenderá como modificación.

El artículo 118 del RGLISTA indica que “las innovaciones deberán ser establecidas por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos,

En ningún caso se afecta a elementos básicos de planeamiento, ni al

modelo territorial previsto, ni a los criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio. Las modificaciones que se proponen no afectan, alteran, ni modifican sustancialmente la ordenación estructural establecida por el Plan vigente.

Por lo tanto, la presente Innovación por Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística es de carácter puntual, en razón de su entidad y alcance.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Es intención de este Ayuntamiento proceder a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz para favorecer el uso residencial, consistiendo dicha modificación en lo siguiente:

A) El artículo 7.6.1.4 de la Ordenanza de Ejes Comerciales del P.G.O.U. vigente remite al plano 3.1 (Calificación y Usos del Suelo Urbano) su ámbito de aplicación. Se propone reducir el ámbito de aplicación de la ordenanza a fin de poder ocupar con uso residencial la crujía de fachada en aquellos ejes comerciales eliminados B) Permitir la compatibilidad del uso residencial en suelo terciario, añadiendo al artículo Art. 3.4.18.2 el apartado c), indicando que “En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios terciarios, en sus categorías de oficinas y servicios de comercialización, se consideran compatibles..... c) El uso residencial (en cualquier posición excepto planta baja)”.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Al ser la competencia sobre urbanismo la que legitima la posibilidad de intervención para favorecer el uso residencial en la ciudad, el objeto de la regulación debe centrarse en la implantación física de dicho uso, debiéndose fundamentar en:

a) Las razones imperiosas de interés general (RIIG) que pueden justificar la regulación: Por ejemplo, la protección del entorno urbano, que está expresamente prevista en artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Un municipio puede estar interesado en contribuir, a través de un plan urbanístico, a que su centro conserve su vitalidad y mantenga su carácter original (por ejemplo, puede regular el tipo de tienda que puede establecerse en cada zona de la ciudad o, impidiendo la concentración de establecimientos de hostelería).

La jurisprudencia mantiene una concepción amplia del concepto de RIIG vinculándolo también a aspectos como el paisaje urbano, saturación de espacios públicos, convivencia vecinal, preservación de la identidad de su casco histórico o el mantenimiento de su vitalidad a través de la fijación de sus residentes.

b) El objetivo de política social vinculado al derecho a la vivienda; el Artículo 4 Texto refundido Ley Suelo: “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Por tanto, ante situaciones de saturación de alojamientos turísticos se justifica la adopción de medidas de naturaleza urbanística tendentes a compatibilizar aquel uso con el residencial y evitar el desplazamiento de la población a causa del encarecimiento de los alquileres o de la escasez de oferta de vivienda residencial.

El ámbito de la modificación se fija desde una concepción global y unitaria del conjunto de la ciudad y se hace extensiva a todo el término municipal.

La necesidad de proceder a la modificación es evidente, ya que la evolución de usos distintos al residencial hacen urgente la adopción de medidas concretas que afectan a determinaciones contenidas en el Plan vigente. Así mismo, y al objeto de favorecer el uso residencial frente a otros usos, también se hace necesario permitir la compatibilidad de ese uso en edificios que hasta el día de la fecha no se permitían.

La Revisión del PGOU define un conjunto de operaciones estratégicas, a las que confía la transformación de la ciudad, entre las que se encuentra la apuesta por un lado, facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos y por otro, la recuperación de los barrios entendidos éstos los espacios urbanos habitables con identidad propia.

La vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), así como el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley LISTA (RGLISTA) establecen que “La innovación de los instrumentos de ordenación urbanística se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación, entendiéndose por revisión la adopción de un nuevo modelo de ordenación establecido por el instrumento de ordenación urbanística, y que toda innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de ordenación urbanística no contemplada en ese apartado se entenderá como modificación.

El artículo 118 del RGLISTA indica que “las innovaciones deberán ser establecidas por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos,

En ningún caso se afecta a elementos básicos de planeamiento, ni al modelo territorial previsto, ni a los criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio. Las modificaciones que se proponen no afectan, alteran, ni modifican sustancialmente la ordenación estructural establecida por el Plan vigente.

Por lo tanto, la presente Innovación por Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística es de carácter puntual, en razón de su entidad y alcance.

VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

En el art. 2.h) del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el

que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) de la Comunidad Autónoma de Andalucía se define la valoración del impacto en salud como el “documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor de una obra o actividad sometidos a evaluación del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad puede producir sobre la salud de las personas”. Según el art. 3.b) del citado Decreto están sometidos a EIS, entre otros, los instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. De acuerdo a la literalidad de la norma, cabría entender que, en principio, cualquier modificación de un Plan General de Ordenación Urbanística estaría sometida al procedimiento de EIS. Sin embargo, es tal la casuística de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, que existen muchos casos en los que, por su propio objetivo y contenido, resulta claramente impropio la aplicación de dicho procedimiento, debido a que puede verificarse de una forma indubitada que su contenido no puede producir ningún efecto negativo, sobre la salud de las personas.

En este sentido, se entiende que la presente modificación se encuentra en dicha situación, cuanto de lo que se trata es de favorecer la implantación del uso residencial protegiendo la calidad de vida de las personas residentes en los modelos de convivencia, en la seguridad en los barrios y en la propia configuración de los espacios públicos.

Es más, si de hecho existiese algún efecto, este debería entenderse como positivo, ya que el impacto en la convivencia ciudadana ante el crecimiento de usos distintos al residencial, como por ejemplo el uso hospedaje y las VUT, (por ejemplo) provocan la percepción de que la intensa presencia de alquileres turísticos y su mayor ocupación genera niveles de ruido que perturban el descanso de los vecinos de las propiedades colindantes, resultando creciente la percepción de un problema de inseguridad, sensación de riesgo, preocupación, etc., generada por la desconfianza ante personas que no son residentes habituales del inmueble, que hacen necesaria una regulación de las normas de compatibilidad de estos usos con el tradicional residencial.

De acuerdo a ello, la Modificación no altera las clasificaciones de suelo, calificaciones, edificabilidades o aprovechamiento del PGOU vigente, ni la regulación normativa de los usos actualmente vigente, ni se establece o altera el marco para la futura autorización de ningún proyecto incluido en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), en el que se relacionan las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, ni en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud, en el que se relacionan las actuaciones del Anexo I de la LGICA que deben ser sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud. Por todo ello, no resulta exigible la emisión de ninguno de los informes de cumplimiento de la legislación sectorial, incluida la no exigencia del procedimiento de evaluación de impacto en la salud.

A mayor abundamiento, se considera que la interpretación de la normativa aplicable debe hacerse de forma sistemática, sin olvidar los principios generales del ordenamiento jurídico vigente. Así, debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y el principio de eficiencia a efectos de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, que expresamente ya se recoge en el apartado 4 del art. 129 (Principios de buena regulación) de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de cumplimentar dicha exigencia legal, se incluye a continuación la valoración del impacto en salud de la presente modificación del planeamiento general, siguiendo para ello lo dispuesto en el Anexo III del Decreto 169/2014.

De acuerdo a dicho Anexo III para llevar a cabo dicha valoración se consideran seis determinantes de salud generales, de modo que para cada uno de ellos habrá que completar:

- Los impactos identificados: Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado de salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden sobre ésta. Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que se produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o programa va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ, respectivamente).
- La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una evaluación cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así como del grado de vulnerabilidad de los grupos afectados.

- a) Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción importante en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por ejemplo, al mejorar notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica extensa, a un gran número de personas, a grupos especialmente vulnerables o cuando sus efectos se extienden en el tiempo.
- b) Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la posibilidad de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se extiende por un corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número moderado de personas, o es fácilmente abordable/reversible.

- Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es

positivo o negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe completar SOLO SÍ se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el espacio correspondiente).

Considerando las principales líneas de actuación que contempla la Modificación del Plan ¿Podría tener impactos significativos en la salud poblacional o en factores del entorno físico, social y económico que inciden sobre ésta? En concreto:

1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y bienestar de las personas? Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relacionados con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación:

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Calidad del aire	x					
Calidad del agua	x					
Calidad del suelo	x					
Ruidos	x					
Olores	x					
Residuos	x					
Contaminación lumínica	x					
Seguridad química	x					
Otros	x					

2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas? Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en dicha accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a los mismos:

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Abastecimiento de agua	x					
Energía	x					
Telecomunicaciones	x					
Infraestructuras redes de transportes y comunicaciones	x					
Espacios públicos de convivencia	x					
Zonas verdes	x					
Otros	x					

3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, a bienes y servicios básicos? Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios sanitarios, etc. Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de abordar las variaciones en la accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la calidad de los mismos como la equidad en el acceso a éstos.

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Transporte público	x					
Vivienda	x					
Servicios sanitarios y emergencias	x					
Educación	x					
Empleo	x					
Deporte	x					

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Cultura	x					
Otros	x					

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social? Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de solidaridad y cohesión social que se mencionan a continuación:

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Redes comunitarias y familiares	x					
Movimientos vecinales	x					
Asociaciones	x					
ONGs	x					
Otros	x					

5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o desarrollar hábitos saludables? Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a continuación:

ASPECTOS	IMPACTOS IDENTIFICADOS			VALORACION DE IMPACTOS		DETALLE Y MEDIDAS
	No	Quizás	Si	Menor	Mayor	
Actividad física	x					
Alimentación adecuada	x					
Consumo de tabaco	x					
Consumo de alcohol	x					
Consumo de sustancias	x					
Otros	x					

En base a lo expuesto, se **CONCLUYE** que la Modificación del PGOU propuesta no produce ningún impacto en la salud de las personas.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Respecto al sometimiento de la presente modificación al trámite de evaluación ambiental en los términos regulados en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental afectando a artículos correspondientes a la ordenación pormenorizada, no se encuentra su objeto en ninguno de los supuestos regulados en el art. 40.2 y 3, por lo que no se sujeta a calificación ambiental estratégica ni ordinaria, habiéndose recibido con fecha 27 de octubre de 2021, informe en ese sentido emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cádiz.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del RGLISTA, la ciudadanía, las entidades representativas de los intereses de la ciudadanía y, en su caso, las entidades de participación ciudadana reguladas en la legislación en materia de participación ciudadana tendrán derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación, gestión y ejecución territorial y urbanística, y para ello, la Administración urbanística adoptará las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de participación ciudadana, difundiendo los procesos participativos de consulta pública y de información pública y facilitando, a través de su portal web o sede electrónica, la participación y el acceso a los instrumentos en trámite en cada una de sus fases.

Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial y en el portal web de la Administración territorial y urbanística, abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento aprobado y presentarse cuantas alegaciones se tengan por convenientes.

MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA

La presente modificación puntual, no conlleva ninguna actuación que deba valorarse económicamente ni desde el punto de vista de la rentabilidad de los propietarios afectados, puesto que no supone una modificación de los usos pormenorizados establecidos en el Plan General sino una adecuación de los

mismos, favoreciendo la implantación del uso residencial frente a otros usos, por lo que se considera que no es necesaria la redacción de una Memoria de Viabilidad Económica.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A) REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE EJES COMERCIALES.

Los ejes comerciales, se grafían en el PGOU vigente en el plano 3.1. de Calificación y usos del suelo urbano, y se regulan en cuanto a su ámbito de aplicación en el art. 7.6.1 y en cuanto a la compatibilidad de usos en el art. 7.6.2. de las Normas urbanísticas.

En concreto, el art. 7.6.1.4. remite al plano 3.1. para delimitar el ámbito de actuación de la Ordenanza de ejes comerciales, que indica "Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las calles o tramos de calle representadas como tales en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano".

Por lo tanto, se modifican las hojas de los Planos de Ordenación Pormenorizada detalla PO3.1. Calificación y regulación del suelo urbano afectadas por la nueva regulación del ámbito de la Ordenanza de Ejes Comerciales, y que son:

· Hoja 04.2.	· Hoja 08.4.
· Hoja 04.4.	· Hoja 09.1.
· Hoja 05.1.	· Hoja 09.3.
· Hoja 05.3.	· Hoja 09.4.
· Hoja 08.2.	· Hoja 14.2.
· Hoja 08.3.	· Hoja 14.4.

Se aportan las hojas de los Planos arriba indicadas, así como "Plano de Conjunto de Ejes Comerciales afectados por la Modificación".

B) PERMITIR LA COMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL EN SUELO TERCIARIO.

En el PGOU vigente, no se permite intercalar usos residenciales (destinados a vivienda) en fincas calificadas con uso terciario (oficinas).

Con la regulación del PGOU actual, en suelos terciarios, son admisibles usos industriales y comerciales en convivencia con el uso terciario principal del edificio. Sin embargo, no es posible la implantación de usos residenciales destinados a vivienda en actuaciones parciales (que ocupen una planta o parte de una planta) de fincas calificadas con este uso terciario.

Se pretende permitir el uso residencial como uso compatible del uso terciario. De modo que un edificio destinado a oficinas pueda albergar puntualmente, y en determinadas condiciones, viviendas en alguna de sus plantas.

Una vez valorada la repercusión de dicha actuación se propone la modificación del artículo siguiente, añadiendo el uso residencial como uso compatible en suelo terciario:

REDACCIÓN ACTUAL

Art. 3.4.18.2. En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios terciarios, en sus categorías de oficinas y servicios de comercialización, se consideran compatibles:

- a) El uso industrial en sus categorías de industria en general, industria de servicios, artesanía y almacenaje en plantas baja y plantas inferiores a la baja.
- b) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y mediano comercio, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Art. 3.4.18.2. En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios terciarios, en sus categorías de oficinas y servicios de comercialización, se consideran compatibles:

- a) El uso industrial en sus categorías de industria en general, industria de servicios, artesanía y almacenaje en plantas baja y plantas inferiores a la baja.
- b) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y mediano comercio, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.
- c) El uso residencial (en cualquier posición excepto planta baja), debiendo justificar expresamente el cumplimiento del art.3.1.15.3 Regulación de la compatibilidad de usos.

COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN:

La competencia para la adopción del acuerdo de aprobación inicial de una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana corresponde al Pleno del Ayuntamiento, siendo necesaria la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, a la vista de lo dispuesto en los artículos 27.1 del Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 22.2 c) y 47.2.II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En función de lo establecido en el artículo 3.3.d 7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, es preceptivo informe previo emitido por el Secretario General.

PROPUESTA

Por todo lo anteriormente expuesto, emitidos los informes técnicos y jurídicos pertinentes, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobación Inicial de la modificación Puntual n.º 11 del P.G.O.U. para favorecer la implantación del uso residencial en la ciudad.

SEGUNDO: Someter el expediente a la participación, consulta,

información y audiencia públicas previas reguladas en los artículos 7 y 8 del RGLISTA y el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la publicación del correspondiente anuncio por un periodo de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial, en el tablón de anuncios y en la página web municipal, al objeto de fomentar la coordinación administrativa y la participación ciudadana en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación del documento de modificación puntual.

TERCERO: Comunicar el Acuerdo de Pleno a la Consejería de Ordenación del Territorio, al objeto de que, si lo estiman procedente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven del mismo.

CUARTO: Dar traslado del documento de modificación puntual a la Consejería competente en materia de Salud, al objeto de solicitar el informe exigido por el Artículo 14 del Decreto 194/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

QUINTO: Dar traslado del de modificación puntual a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, al objeto de que se emita el informe oportuno sobre Calificación Ambiental, previo a la aprobación definitiva, en virtud de lo regulado en los artículos 40 y siguientes de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”.

Tras debate, por la Presidencia se somete a votación dicha propuesta, que es aprobada por veintinueve votos a favor, emitidos por los Concejales de los Grupos Popular (14) y Socialista (7), ningún voto en contra; y seis abstenciones del Grupo Adelante Izquierda Gaditana.

Cádiz a 7 de julio de 2025. El Jefe del Servicio de Urbanismo. Fdo.: Juan Jesus Castillo Costilla.

Nº 112.061

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

ANUNCIO

En el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento, sito en la sede electrónica de esta Corporación, <https://ubrique.sedelectronica.es> se encuentran expuestas al público las lista de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente a participar en el procedimiento selectivo convocado para cubrir en propiedad una plaza de Policía Local, vacante en este Ayuntamiento.

Los aspirantes excluidos provisionalmente, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para subsanar los defectos advertidos, presentando la documentación correspondiente.

El anuncio de aprobación de las listas definitivas, se hará público en los mismos lugares, y junto a él se indicará la fecha de celebración del primer ejercicio y el nombre de las personas que componen el tribunal de selección a efectos de recusación.

07/07/2025. La concejal delegada, Marian Moreno Gil. Firmado.

Nº 112.111

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

E.L.A. DE TAHIVILLA

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONSISTENTE EN CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO.

La Junta Vecinal de Tahivilla, en Sesión Ordinaria celebra el día 31 de mayo de 2025 aprobó el expediente de modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario (expediente G2025/3316) y no habiéndose presentado reclamación alguna, se considera definitivamente aprobado el acuerdo de referencia. En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a continuación, se publica en su integridad:

1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO		
Económica	Descripción	Importe
454/63100	Reparación de camino Rural acceso huertos sociales	35.067,55 €
TOTAL		35.067,55 €
2.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO		
Económica	Descripción	Importe
011/35900	Comisiones y Gastos Mto. Cuenta	12,10 €
TOTAL		12,10 €

Estos incrementos de gasto se propone financiarlas con recurso al remanente de tesorería:

Económica	Descripción	Importe
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	35.079,65 €

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio. Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Tahivilla, a 8 de julio de 2025. El Presidente, Fdo.: Diego España Calderón. El Secretario General Accidental, Fdo.: Francisco Javier Ochoa Caro.

Nº 112.453

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 26 de mayo de 2025, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 3/CEX/04/2025 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, que se hace público como sigue a continuación y resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.468,75	24.828,51
VI	INVERSIONES REALES	6.359,76	

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Arcos de la Frontera a 8 de julio de 2025. El alcalde. Fdo.: Miguel Rodríguez Rodríguez.

Nº 112.674

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

ANUNCIO

A través del presente se hace público que la Sra. alcaldesa, mediante Decreto de fecha 8 de julio de 2025, ha procedido al nombramiento de D. Ramón Núñez Núñez como alcalde acctal. de esta Corporación, durante la ausencia de la titular, entre los días 15 de julio y 3 de agosto de 2025, ambos inclusive.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

08/07/2025. LAALCALDESA. Fdo.: Dña. Remedios Palma Zambrana.

Nº 112.749

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

ANUNCIO

Por medio del presente se pone en conocimiento que, mediante Resolución de la Alcaldía, con referencia administrativa VJSEC-00159-2025, de fecha siete de julio de dos mil veinticinco, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente SE HA RESUELTO:

“CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 21, apartados 1 b) y 3, y artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre; artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales; artículos 38 y siguientes y el artículo 56 del Reglamento Orgánico Municipal publicado en el BOP de Cádiz nº 115 de fecha 19/06/2013 y demás disposiciones concordantes aplicables, así como en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre de Modificación del Código Civil en materia de autorización de matrimonio civil por los Alcaldes, y la Instrucción de 26 de enero de 1995,

sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, y al respecto de la delegación a favor del Concejal de este Ayuntamiento, ante la imposibilidad de asistencia del Sr. Alcalde-Presidente.

VISTO el escrito con RME núm. 2025005800E, de fecha 17 de junio de 2025, presentado por DON RAFAEL MUÑOZ DE ARENILLAS CALBO, solicitando contraer Matrimonio Civil en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera el día 11 de julio de 2025, a las 12:00 horas.

RESULTANDO.- Que mediante Decreto de la Alcaldía con referencia administrativa VLALC-00082-2025, de fecha 03/07/2025, ha quedado fijada la celebración de la ceremonia de matrimonio civil de los contrayentes en el día y hora solicitados por los interesados.

RESUELVO:

PRIMERO.- DELEGAR el acto solemne de celebración y autorización del Matrimonio Civil, previsto para el día 11 de julio de 2025, a las 12:00 horas, en la Sra. Concejala de este Excmo. Ayuntamiento, DOÑA MARÍA DOLORES DE MELO RODRÍGUEZ, que se celebrará en el Salón de Plenos de la Corporación Municipal.

SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, será fijada en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial y de ella se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

TERCERO.- En lo no previsto, se estará a lo establecido en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones que resulten de aplicación. “

Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera, a 8 de julio de 2025. EL ALCALDE. Fdo.: Antonio González Mellado. Nº 112.760

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

EDICTO

D^a. AURORA SALVADOR COLORADO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,

HACE SABER:

Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2025, por mayoría (12 votos a favor, 7 abstenciones y 0 voto en contra), el expediente de modificación presupuestaria nº 3762/2025 de crédito extraordinario del Presupuesto Municipal vigente, y en virtud de lo establecido en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, estando el expediente a su disposición durante dicho periodo en el Servicio de Infraestructuras.

Puerto Real, a 8 de julio de 2025. LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Aurora Salvador Colorado. Firmado.

Nº 112.775

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO

Asunto: Adopción de medidas en materia de vivienda previstas en el Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de viviendas.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2025, al punto 5º, adoptó el siguiente acuerdo:

“Se da cuenta de propuesta del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de junio de 2025, al punto 3º del orden del día, que a continuación se transcribe:

“Emitido informe jurídico por el jefe de Urbanismo en los siguientes términos:

“ANTECEDENTES.

El artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que, para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de vivienda, indicando el artículo 56 del mismo que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materias de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

En el ejercicio de dichas competencias, con fecha 4 de marzo de 2025 entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda (BOJA 3 de marzo de 2025), cuyo objeto es establecer medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como agilizar su construcción, materializando para ello un plazo temporal que

contribuya a la finalidad de impulsar el desarrollo de nuevas viviendas protegidas a precio asequible que faciliten el acceso a una vivienda digna y adecuada, con especial atención a los jóvenes y a aquellos colectivos necesitados del apoyo de los poderes públicos.

Se trata de hacer real y efectivamente aplicables nuevas vías de solución para dar respuesta a la urgencia en la necesidad que tiene la población andaluza para acceder a una vivienda. Con ello se establece un régimen especial que permite edificar las viviendas protegidas en las parcelas sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten los límites establecidos para garantizar el cumplimiento del régimen de las actuaciones de transformación urbanística, el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada inserción de las actuaciones edificatorias en la ordenación urbanística de su entorno.

CONSIDERACIONES

Con fecha 18 de junio de 2025 se ha emitido informe por el Arquitecto municipal, en el que se analizan las medidas planteadas en la normativa autonómica, valorándose la justificación, oportunidad y la conveniencia de su adopción, al objeto de dar una respuesta urgente al desequilibrio entre la demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible en el municipio.

En dicho informe se indica lo siguiente:

“El citado Decreto Ley 1/2025 pretende facilitar el acceso a la vivienda con medidas que permitan ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido y autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, proponiéndose la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización.

En el artículo 2 del Decreto-Ley 1/2025, de “Medidas en materia de suelo para la promoción de vivienda protegida”, se establece, en términos generales, una serie de medidas de carácter transitorio para aumentar el suelo urbanizado destinado a vivienda protegida, para lo cual se requiere de un acuerdo del órgano municipal competente que deberá ser adoptado en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto-ley y en el que se establece un plazo de dos años para solicitar licencia y tres años para terminar las obras desde su concesión.

En base a dicho artículo 2 apartado 3, se permiten cambios de uso en:

- 1.- Parcelas de uso oficinas o alojamiento turístico: Se autoriza el cambio de uso a residencial de vivienda protegida.
- 2.- Parcelas de uso dotacional privado sin destino específico o estén calificadas con el uso genérico de servicios de interés público y social: Se autoriza el cambio de uso a residencial de vivienda protegida si las viviendas protegidas se destinan permanentemente al alquiler.

En base a dicho artículo 2 apartado 4, se permiten aumento del nº de viviendas en :

1.- Parcelas de vivienda libre: Podrá incrementarse un 20% la densidad de viviendas si se destina todo el edificio a vivienda protegida. Así como el aumento de la edificabilidad proporcionalmente siempre sin superar el aprovechamiento urbanístico.

2.- Parcelas de vivienda protegida sin edificar: Podrá incrementarse un 20% la densidad de viviendas, y podrá aumentarse el 10% de su edificabilidad

Así mismo, se establecen una serie de condiciones para posibilitar dichos cambios de uso sin la necesidad de modificación de los instrumentos de ordenación urbanística, y que consisten en:

- La parcela debe ser apta para viviendas, tener la condición de solar o edificarse de forma simultánea a las obras de urbanización, estar en zona residencial y tener ordenación pormenorizada.
- El uso de Vivienda protegida afectará a toda la parcela o edificio (con un máximo del 20% para usos compatibles).
- Los parámetros de la edificación se ajustarán a la ordenación vigente. La densidad máxima será la edificabilidad residencial dividida entre 70.
- El uso alternativo de vivienda protegida no supone una alteración del aprovechamiento urbanístico asignado a la parcela, aun así, el proyecto deberá reservar las dotaciones correspondientes conforme al art. 82.5 del Reglamento de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre o sustituirse este deber por alguna de las formas previstas en su artículo 49.

Finalmente, y como aspectos adicionales:

- Se contempla la posibilidad de tramitar estudio de detalle para modificar las condiciones de edificación.
- Las condiciones de uso de vivienda protegida deberán inscribirse en el registro de la propiedad.
- El solicitante de la licencia deberá asumir los costes de urbanización, si fueran necesarios.

Se informa de la conveniencia y oportunidad de la aplicación en todo el término municipal de las medidas urgentes en materia de vivienda en lo referente al cambio de uso de parcelas dotacionales privadas en los términos previstos en el art.2.3, así como las de cambio de uso y aumento de densidad en las condiciones descritas en el art. 2.4, del Decreto-Ley 1/2025 tanto en parcelas y edificios existentes calificados como vivienda libre, como en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida.

Por todo lo anterior, el Arquitecto Municipal estima que no hay inconveniente en la aprobación de lo siguiente:

1. Autorizar el incremento de un 20% de la densidad de viviendas en parcelas y edificios existentes en todo el suelo urbano existente, calificado por el planeamiento urbanístico con el uso residencial de vivienda libre, siempre que el

edificio resultante se destine en su totalidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección. En estos supuestos, la edificabilidad podrá incrementarse en el porcentaje necesario siempre que no se supere el aprovechamiento urbanístico de la parcela, y siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.4 del Decreto-ley 1/2025.

2. Autorizar el incremento en un 20% de la densidad de viviendas y en un 10% de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida en todo el suelo urbano existente, siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.4 del Decreto-ley 1/2025.

3. Autorizar como uso alternativo el residencial de vivienda protegida en las parcelas calificadas por los instrumentos de ordenación urbanística con el uso Dotacional privado que no tenga asignado un uso específico o que tengan la calificación de uso genérico de servicios o de interés público y social, siempre que se destinen permanentemente a alquiler. En los términos previstos en el art. 2.3. del Decreto-ley 1/2025.

Los plazos para solicitar licencia de obras y, para una vez expedida, ejecutar las obras serán los establecidos en el Decreto Ley 1/2025. Dos años desde la adopción del acuerdo del órgano municipal competente para solicitar la licencia de los edificios de viviendas protegidas y un plazo de tres años para terminar las obras desde que esta fuera concedida”.

En cuanto al procedimiento de aplicación, prevé el Decreto-ley la necesidad de un acuerdo municipal expreso que garantice el principio de autonomía local y las potestades públicas sobre la ordenación urbanística, lo que es congruente con el artículo 3.4 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), en cuanto define la actividad urbanística como una función pública que, desarrollada en el marco de la ordenación territorial, corresponde a los Municipios, sin perjuicio de la competencias que, por esta ley, se asignan específicamente a la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, el artículo 75.1 de la LISTA, señala que corresponde a los municipios las competencias relativas a la tramitación y aprobación de todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones, salvo las asignadas en el apartado 2 de dicho artículo a la Consejería competente en Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La competencia para la aprobación del acuerdo de aplicación de medidas del Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda en el ámbito municipal corresponde, por tanto, a este Ayuntamiento, siendo el órgano legitimado para ello el Pleno del Excmo. Ayuntamiento por ser competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación que, de conformidad con el régimen transitorio del artículo 2 del Decreto-Ley 1/2025, devienen innecesarios. Se requiere el voto favorable de la mayoría simple; todo ello en base al artículo 123, apartados nº 1.i) y nº 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

PROPUESTA

Por todo lo anteriormente expuesto y emitidos los informes técnico y jurídico, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Disponer la aplicación de las medidas del artículo 2 del Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda en el ámbito municipal “Medidas en materia de suelo para la promoción de vivienda protegida” en todas las zonas del suelo urbano del municipio, en los términos recogidos en el informe emitido por el Arquitecto municipal consistentes en:

1. Autorizar el incremento de un 20% de la densidad de viviendas en parcelas y edificios existentes en todo el suelo urbano existente, calificado por el planeamiento urbanístico con el uso residencial de vivienda libre, siempre que el edificio resultante se destine en su totalidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección. En estos supuestos, la edificabilidad podrá incrementarse en el porcentaje necesario siempre que no se supere el aprovechamiento urbanístico de la parcela, y siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.4 del Decreto-ley 1/2025.

2. Autorizar el incremento en un 20% de la densidad de viviendas y en un 10% de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida en todo el suelo urbano existente, siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.4 del Decreto-ley 1/2025.

3. Autorizar como uso alternativo el residencial de vivienda protegida en las parcelas calificadas por los instrumentos de ordenación urbanística con el uso Dotacional privado que no tenga asignado un uso específico o que tengan la calificación de uso genérico de servicios o de interés público y social, siempre que se destinen permanentemente a alquiler. En los términos previstos en el art. 2.3. del Decreto-ley 1/2025.

SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- Dar traslado a la Consejería competente en materia de vivienda, para evaluar el grado de implantación de las medidas en la Comunidad Autónoma y a los Colegios Profesionales con competencia en materia urbanística.

Tras debate, por la Presidencia se somete a votación dicha propuesta, que es aprobado por veintidós votos a favor, emitidos por los concejales de los Grupos: Popular (14) y Socialista (7), ningún voto en contra, y seis abstenciones del Grupo Adelante Izquierda Gaditana”.

Cádiz, a 8 de julio de 2025.

EL jefe del Servicio de Urbanismo, por delegación del secretario general, Juan Jesús Castillo Costilla. Firmado.

Nº 112.796

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

EDICTO

D^a. AURORA SALVADOR COLORADO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,

HACE SABER:

Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2025, por mayoría (9 votos a favor, 11 abstenciones y 1 voto en contra), el expediente de modificación presupuestaria de Transferencia de Crédito Extraordinario del Presupuesto Municipal vigente nº 5679/2025.

Que habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 110 de 12 de junio de 2025 y n.º anuncio 86.546, sin que se hayan presentado alegaciones, se considera aprobada definitivamente el expediente de modificación presupuestaria de Transferencia de Crédito Extraordinario del Presupuesto Municipal vigente n.º 5679/2025, y se publica el mismo para su general conocimiento a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

- Creación e incremento de las aplicaciones presupuestarias siguientes con los importes que se detallan:		
Aplicaciones Presupuestarias	Descripción	Importe
338/48211	Fiestas populares y festejos /Subvención para Federación de Peñas Puertorrealeñas con CIF G11228624	3.500,00 €
334/48212	Promoción cultural /Subvención para Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real con CIF G11021433	7.000,00 €
334/48213	Promoción cultural /Subvención para Junta Local de Hermandades y Cofradías con CIF V11092558	5.000,00 €
334/48214	Promoción cultural /Subvención para Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music con CIF G56201643	7.000,00 €
334/48215	Promoción cultural /Subvención para Asociación La Máquina Creativa con CIF G72378508	2.000,00 €
334/48216	Promoción cultural /Subvención para Asoc de Belenistas D. Ángel Carlier con CIF G11391620	3.000,00 €
334/48217	Promoción cultural /Subvención para Universidad de Cádiz con CIF Q1132001G	7.000,00 €
- Baja de la siguiente aplicación presupuestaria por el importe que se detalla:		
Aplicación Presupuestaria	Descripción	Importe
924/48200	Participación Ciudadana/A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.500,00 €

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Puerto Real, a 9 de julio de 2025. LA ALCALDESA. Fdo.: Aurora Salvador Colorado. **Nº 113.233**

**Asociación de la Prensa de Cádiz
Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia**

Administración: Calle Ancha, nº 6. 11001 CADIZ
Teléfono: 956 213 861 (4 líneas). Fax: 956 220 783.
Correo electrónico: boletin@bopcadiz.org
www.bopcadiz.es

INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).

PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959